

## ¿Quién dijo que todo está perdido?



"Los Gobierno populares son débiles ante el escándalo. No tienen, ni cuentan con la recíproca solidaridad encubridora de las oligarquías y son sus propios partidarios quienes señalan sus defectos que después magnifican en la prensa. El pequeño delito doméstico se agiganta para ocultar el delito nacional que las oligarquías preparan en la sombra y el vende patria se horroriza ante las sisas de la cocinera".

ARTURO JAURETCHE

Por **Azul Martínez**

Durante el gobierno anterior tomó fuerza un discurso peligroso que puso el eje en el mérito, sosteniendo que los privilegios de los que gozan determinados grupos sociales fueron conseguidos por medio del esfuerzo individual, mientras aquellos que no acceden a ciertos bienes y servicios permanecen excluidos por falta de voluntad, por no haber hecho lo suficiente para mejorar sus condiciones de vida. ¿Son pobres porque quieren?, es una frase que representa con exactitud esta forma de ver el mundo

El discurso de la gestión actual buscó constituirse en oposición a esa retórica, en oposición a pensar la meritocracia como camino hacia el progreso de un país. "No existe el mérito donde el más tonto de los ricos tiene más posibilidades que el más inteligente de los pobres?", afirmó unos meses atrás el presidente Alberto Fernández, derribando el argumento que sostiene la existencia de igualdad de oportunidades para todos y todas.

Más allá del plano discursivo, su gestión llevó adelante hechos concretos que estuvieron en sintonía con esta convicción. Uno de estos fue la decisión de devolver a la salud su rango ministerial, luego de que el macrismo la degradara a la categoría de una secretaría, lo que implicó destinar una mayor cantidad de recursos para democratizar su acceso y no seguir abogando por políticas que tendían a concentrarla, prioritariamente, entre quienes podían pagarla.

Pero la lista sigue: la puesta en marcha de obras para terminar hospitales que quedaron inconclusos también durante el gobierno anterior, como en el caso de los establecimientos René Favaloro y Néstor Kirchner en La Matanza, cuyos avances se paralizaron a principios del 2016. Laos trámites para recuperar más de 12 millones de vacunas que la gestión de Mauricio Macri había dejado varadas en la Aduana del Aeropuerto Internacional de Ezeiza para no pagar los impuestos correspondientes (sumado a las más de dos millones de antigripales y las 600.000 dosis de la triple que dejaron vencer).

Las rápidas acciones de prevención tomadas para hacer frente a la pandemia del Coronavirus, los planes de ayuda y asistencia económica con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) a la cabeza, las rápidas negociaciones para abastecer al país de vacunas e iniciar una campaña de vacunación histórica, acompañada por el esfuerzo de miles de trabajadores y trabajadoras de la salud que se día a día se encargan de organizar los operativos en cada región del país, monitoreando este proceso con responsabilidad y compromiso. Estas acciones ponen de manifiesto las bases de un gobierno que considera que la salud nunca debe ser un privilegio de clase sino un **derecho**.

A quienes se paran del lado de estas políticas hoy les cuesta entender como un hombre con semejante trayectoria en el ámbito sanitario, que logró hacer frente con celeridad a una pandemia desconocida e impensada para toda la humanidad, que impulsó programas históricos para garantizar un sistema de atención eficiente para los sectores más vulnerados y políticas en pos del cuidado de sus bolsillos en los momentos de mayores crisis (enfrentando incluso a los grandes laboratorios farmacéuticos como con la **Ley de Genéricos** sancionada en el 2002 cuando era ministro de Salud y Ambiente de Eduardo Duhalde), deba dejar su cargo por un error ético, y ante todo no menor, pero cuyas consecuencias podían ser previstas y, por ende, evitadas.

En el mientras tanto aparecerá la habitual hipocresía de los principales medios opositores que ahora se rasgan las vestiduras por las vacunas cuando hasta el día anterior no tenían reparos en sembrar dudas sobre su efectividad, incluso llegando a manipular los dichos de una escritora para su conveniencia. Basta recordar el recorte que hizo La Nación de la frase: "me ofrecieron la vacuna por debajo de la mesa y dije 'jamás, prefiero morirme ahogada de Covid'", pronunciada por Beatriz Sarlo. El medio la utilizó para titular una nota, pero eligió sacar "por debajo de la mesa", como si se tratara de un detalle menor y prescindible: "Me ofrecieron la vacuna y dije jamás, prefiero morirme ahogada de Covid". Aun después de corregida, luego de las repercusiones generadas, el daño ya estaba hecho.

En esta maraña de idas y venidas, enojos, acusaciones, teorías conspirativas, descargos y mea culpas, si de algo no se tendría que dudar es de que Alberto Fernández obró correctamente al solicitarle a González García la renuncia. Más allá del dolor por lo sucedido, si este tipo de hechos no son tratados por el Estado con el rigor que requieren y condenados acorde a su gravedad, entonces ¿a quién acude la sociedad para exigir transparencia? ¿Quién queda para garantizar que se cumpla el calendario de vacunación en función del orden de prioridades establecido si los que deben hacerlo miran para el costado?

De un gobierno que reivindica la meritocracia como forma de vida puede esperarse un actitud encubridora e incluso negadora de un hecho como este, puede esperarse que sus voceros le resten importancia, que intenten cubrirlo con otro asunto, que no sea tapa de una gran cantidad de medios, que no se hable incansablemente del tema en los programas de TV, estas y muchas otras cosas pueden esperarse de un gobierno que niega privilegios donde los hay para vender igualdad donde no la hay. De donde no puede esperarse lo mismo es de una gestión que acepta el desafío de llevar adelante políticas públicas en favor de las mayorías. Se debe confiar en que esta tendrá la misma valentía para asumir errores y la diligencia para resolverlos, sin dejar que los mismos afecten sus estructuras de base. Máxime a sabiendas de que el poder mediático, como sentenció Jauretche, está siempre a la espera del pequeño delito doméstico para agigantarlo, tapando así los verdaderos delitos que atentan contra los intereses nacionales y el bien común.

Foto: Cedoc